

Inmigración: escuchemos lo que nuestros vecinos del sur tienen que decirnos

Philippe Fargues

Demógrafo. Director

Consorcio Euromediterráneo para la Investigación Aplicada sobre Migración Internacional (CARIM)
Instituto Universitario Europeo de Florencia

A finales de verano de 2005, varios jóvenes murieron en la frontera de Melilla cuando trataban de entrar en Europa. Un mes más tarde, otros chicos, éstos nacidos ya en Europa, hijos de inmigrantes, expresaron su descontento mediante disturbios que agitarían los extrarradios de París y de otras ciudades francesas durante buena parte del otoño frente a la desigualdad de oportunidades que siguen sufriendo tras una generación. En vísperas de la llegada del nuevo año, varias decenas de inmigrantes sudaneses encontraron la muerte en el centro de El Cairo, ante la sede de la Agencia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), donde, junto a unos tres mil compatriotas suyos, habían intentado que se reconociese su estatus de refugiados durante meses.

Desde este momento, en la periferia de París, a las puertas de los enclaves españoles en Marruecos o en el corazón de Egipto, se reúnen uno al lado del otro grupos de población de África del Norte y del África Subsahariana. En la actualidad, la región que se extiende desde Marruecos a Turquía, al sur del Mediterráneo, constituye uno de los espacios migratorios más activos del mundo: un gran foco de inmigración, al mismo tiempo que un punto de paso muy utilizado por las nuevas corrientes migratorias, procedentes del sur y del este. El tema de la migración fue el centro de

la reunión ministerial del diálogo del «5+5» (los países del Mediterráneo occidental; cinco del Magreb: Argelia, Libia, Marruecos, Mauritania y Túnez, y cinco de Europa: España, Francia, Italia, Malta y Portugal) organizada en París los días 9 y 10 de noviembre por el ministro francés Jean-Louis Borloo, antes de la conferencia ofrecida en la cumbre del Partenariado Euromediterráneo que el Presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, acogió en Barcelona los días 27 y 28 de noviembre.

¿Cuáles son los niveles y las tendencias de las migraciones de procedencia, de destino o transitorias en los países del sur del Mediterráneo? ¿Qué impacto causan en el desarrollo de los países de origen? ¿Y en el de destino? ¿Cómo responden ante ellos los Estados y las sociedades? Todas estas preguntas son el objeto de un informe publicado en octubre por el Instituto Universitario Europeo de Florencia, en el marco de un proyecto financiado por la Comisión Europea: *Migraciones mediterráneas – Informe del 2005*. El informe abarca los siguientes países, de oeste a este: Marruecos, Argelia, Túnez, Egipto, Jordania, Israel, Territorios Palestinos, Líbano, Siria, Turquía. Este informe de 400 páginas es el resultado de un trabajo en equipo de una treintena de expertos de los países del sur del Mediterráneo, demógrafos, juristas y politólogos, que ofrecen la primera investigación sistemática sobre este tema de gran urgencia política, y destacan, sin que sirva de precedente, la visión del sur. A continuación presentamos algunos de sus resultados.

El primer resultado no sorprenderá: a pesar de las restricciones impuestas a la inmigración, que cada vez son mayo-

res en todo el mundo, la emigración es una característica constante en la zona sur del Mediterráneo. Entre 10 y 15 millones de emigrantes de primera generación son originarios de esta zona. Sería ilusorio buscar una cifra más precisa, ya que la estadística se enfrenta a dos realidades contradictorias: la del país de residencia y la del país de origen, que no incluyen las mismas personas en su recuento de emigrantes. Las personas con doble nacionalidad, ciudadanos para el país adoptivo, son considerados como expatriados por su país de origen, al igual que sus hijos. Por un lado ya no son inmigrantes, pero por el otro todavía son emigrantes. Sin embargo, las dobles nacionalidades no son suficiente motivo para explicar una diferencia que puede ser del doble en el recuento de los países de residencia y el de los consulados del país de origen. Los emigrantes temporales y los inmigrantes en situación ilegal son otro de los factores determinantes. Porque los consulados son susceptibles de ofrecer protección a aquellos de sus expatriados que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Los consulados abarcan una parte de esta población que la estadística normal no tiene en cuenta.

Nos guste o no, la emigración del sur del Mediterráneo, que se había ralentizado durante los dos últimos decenios, está ahora en una nueva fase de crecimiento. Marruecos es un claro ejemplo de ello. Según los registros consulares, los efectivos marroquíes que residen en el extranjero pasaron de 1,5 millones en el año 1993 a 3,1 millones en 2004 (el doble en doce años), lo que representa un crecimiento anual de un 6,3 % entre la población emigrante marroquí, frente al 1,3 % de la población

total de Marruecos. Francia se sitúa a la cabeza tanto en lo que se refiere al número total de registros marroquíes (1.115.000 en 2004) como en el de los efectivos suplementarios (+435.000 en doce años), seguido de España (+360.000 en doce años, por un total de 425.000 en 2004) y de Italia (+210.000 / 300.000). Los datos españoles, más recientes que los de los consulados marroquíes, muestran que el movimiento de emigración marroquí continúa: el número de marroquíes registrados en España pasó de los 420.556 de 31 de diciembre de 2004 a los 511.294 de 31 de diciembre de 2005, es decir, un crecimiento del 21,5 % en un año (www.ine.es).

Cada uno a su escala y con sus destinos específicos, países como Egipto, Argelia, Túnez y el Líbano presentan tendencias similares a las de Marruecos. La prolongación, para un decenio todavía, de un fuerte crecimiento demográfico entre los jóvenes adultos de estos países y su falta de perspectivas sobre los mercados laborales locales tiende a hacer pensar que las presiones migratorias continuarán durante varios años más. Solamente Turquía rompe esta tendencia, gracias a su espectacular crecimiento económico que ha comenzado a provocar que varios de los antiguos emigrantes regresen.

El segundo resultado es el menos esperado en Europa, que se ve de buen grado como el punto de mira de todos los emigrantes. Europa no es el único destino de los emigrantes procedentes del sur del Mediterráneo. En realidad, nuestro continente acoge a menos de la mitad de estos emigrantes. Los Estados árabes del Golfo y Libia acogen al mismo número de emigrantes, aunque sus políticos, ultraproteccionistas, dejan entrever una futura reducción drástica del acceso al empleo por parte de los inmigrantes, a pesar del remonte espectacular de la renta petrolífera. Más alejados se encuentran Estados Unidos y Canadá, que se revelan como un nuevo polo de atracción. En la actualidad reciben menos del 10 % de los emigrantes de la zona sur del Mediterráneo, pero más del 50 % de ellos son emigrantes cualificados. Mientras que el 66 % de los emigrantes de primera generación originarios del sur del Mediterráneo en Europa tienen un nivel edu-

cativo inferior o igual a los estudios primarios, el 58 % de los que han emigrado a América del Norte son inmigrantes con estudios universitarios.

Esta diferencia existente entre Europa y América del Norte se explica, en parte, por la sucesión de las generaciones: la migración a Europa, más antigua, se remonta a tiempos en los que pocos jóvenes procedentes de los países del sur del Mediterráneo habían superado los estudios secundarios y habían logrado acudir a la universidad. Pero también contrasta con las políticas en materia de inmigración económica: una apertura, sin duda selectiva, en el caso de América del Norte, frente a un hermetismo generalizado en Europa.

Actualmente está de moda lamentar la fuga de cerebros, pero hay que evitar las generalizaciones. Los países del sur del Mediterráneo no son iguales a los del sur del Sáhara. En Egipto, Argelia, Marruecos o Túnez, la situación es muy complicada para cohortes cada vez más numerosas de jóvenes diplomados: en primer lugar, el paro, que afecta a esta categoría más que a otras, a veces durante varios años; luego, cuando por fin se consigue un trabajo, a menudo, llega la decepción de que el nivel profesional y los sueldos están por debajo de los deseos y las expectativas iniciales. En estas condiciones, la circulación de competencias no se trata ya de una imposición, sino de la libre elección por parte de hombres y mujeres responsables. Más que estigmatizarla, hay que organizarla de modo que sea más beneficiosa para todas las partes.

¿Cómo ven los Gobiernos del sur del Mediterráneo la emigración de sus administrados? El empleo es la prioridad primordial. Aunque reconocen que la emigración puede aliviar la presión en el mercado laboral, ninguno la preconiza abiertamente como una solución al paro. Sin embargo, todos perciben las diásporas, es decir, el resultado de una emigración pasada, como una fuente de ingresos que es necesario cultivar. Un recurso económico, puesto que el dinero enviado por los emigrantes (cerca de 20 mil millones de dólares por año para el conjunto del sur del Mediterráneo) contribuye al equilibrio de las balanzas de pagos excesivamente deficitarias y permiten mejorar las condiciones de vida de las familias de los emigrantes en sus

regiones de origen, que se encuentran entre las más pobres, y en donde dicho dinero se invierte principalmente en alojamiento, sanidad y educación. Y también un recurso diplomático, puesto que la confianza manifestada por las diásporas es una garantía para la apertura de sus países de origen, y por lo tanto un triunfo para atraer las inversiones extranjeras.

Uno detrás de otro, todos los países del sur del Mediterráneo han ido creando instituciones, y a menudo también ministerios, para gestionar todo lo relacionado con los expatriados. Estas instituciones siguen tres líneas políticas: la maximización de los beneficios económicos derivados de las diásporas, la protección de sus derechos en los países de residencia y la conservación de su identidad cultural. La primera línea se traduce en una modernización de las instituciones bancarias y de la fiscalidad, la segunda en el desarrollo del Estado de derecho, y la tercera gira en torno a la ampliación de las actividades, principalmente las religiosas, organizadas desde los países del sur del Mediterráneo y dirigidas a los emigrantes de segunda generación.

Estas líneas de acción política dejan algunas cuestiones sin resolver. En primer lugar, ¿cuál será la sostenibilidad de un desarrollo basado en los envíos de dinero ahorrado por los emigrantes? Las remesas que un emigrante pueda enviar a su país de origen tienen su propio ciclo: en un primer momento, estas remesas crecen a medida que se van resolviendo los problemas de instalación; más tarde decrecen, cuando el emigrante va dejando de serlo progresivamente, porque poco a poco va rehaciendo su vida en el país de residencia. Para mantener un flujo regular de transferencias de dinero hace falta un flujo regular de nuevos emigrantes. La emigración temporal es el esquema que mejor se adapta a este objetivo.

En segundo lugar, ¿están los países de origen dispuestos a conceder a sus emigrantes los mismos derechos que defienden para ellos en los países de acogida? Dejando a un lado a Argelia, ningún otro país del sur del Mediterráneo reconoce el derecho a que los emigrantes participen en los procesos políticos de sus países de origen.

En tercer lugar, las políticas de defensa de la identidad llevadas a cabo por los países de origen, ¿son totalmente compatibles con la integración efectiva de los emigrantes en la sociedad de acogida? Podemos tener dudas al respecto, ya que esa sociedad, como en el caso de Francia, es reticente a la formación de comunidades y se basa en fuertes instrumentos de homogeneidad cultural, empezando por la escuela.

El tercer resultado derivado de la investigación realizada es que el sur del Mediterráneo está lejos de ser algo más que una mera región de emigración. Cuenta con 3,6 millones de residentes nacidos en el extranjero y 2,1 millones de no nacionalizados. Además de las migraciones «clásicas» en la región de Oriente Próximo (inmigrantes judíos y refugiados palestinos) se registran todo tipo de flujos de inmigración de importancia y legalidad variables, como es el caso de los subsaharianos en el Magreb, pero también de los sudaneses en Egipto, los sirios en el Líbano, los iraquíes en Jordania, los moldavos y georgianos en Turquía o incluso los filipinos y la población de Sri Lanka en todos los países de la zona del Oriente árabe. Los migrantes de paso, los que están de camino a Europa (o a otros continentes) y que perma-

necen bloqueados en el sur del Mediterráneo a falta de poder llegar a su destino inicial no forman parte de la mayoría de estas corrientes, a pesar de lo que se cree en Europa.

Todos estos países han adoptado legislaciones o políticas que les permiten dotar de un estatus social a los extranjeros y definir sus accesos a ciertos derechos y deberes. Pero solamente Marruecos (2003) y Túnez (2004) disponen de leyes concretas para gestionar la entrada y la estancia de los extranjeros, en vistas a combatir la inmigración ilegal y penalizar a los que la facilitan o se benefician de ella. En Marruecos, la ley aprobada en 2003 ha dado lugar a numerosos meses de intenso debate, auténticamente democrático, sobre la posibilidad de enajenarse de los vecinos del sur del Sáhara para complacer a los del norte del Mediterráneo, o «pisotear» los derechos humanos que establecen que «toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del suyo propio» (artículo 13), reprimiendo la salida de Marruecos de los emigrantes irregulares.

Sería perjudicial el hecho de limitar la prevención de la inmigración ilegal a un servicio de prestado a Europa. En el sur del Mediterráneo, víctima de un índice de paro de dos cifras, responde

también, y sobre todo, a la preocupación por la protección de los ciudadanos nacionales en el mercado laboral. Incluso si no se adhieren a los métodos recomendados por algunos Gobiernos europeos para contener las migraciones ilegales, como el establecimiento de campamentos para aislar y alejar a los inmigrantes de su territorio, los países del sur del Mediterráneo comparten con Europa el enfoque sobre seguridad de este problema. En lo que los puntos de vista divergen de un lado al otro del Mediterráneo, y allí donde los Gobiernos europeos deberían escuchar a sus socios del sur, es en la cuestión de las migraciones económicas y el enfoque global que el sur reclama: no podemos concentrarnos de modo eficaz en la represión de la inmigración ilegal sin aplicarnos en la tarea de prevenirla, y sin reconocer que el desarrollo pasa por la organización de las migraciones económicas legales.

Referencias

Migrations méditerranéennes - Rapport 2005, elaborado bajo la dirección de Philippe Fargues. Disponible en www.carim.org